

RESOLUCION N. 03356

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN PROCESO SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES

LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, con fundamento en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la Ley 1437 del 18 de enero 2011, en concordancia con el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado por el Decreto 175 del 4 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas por la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente, y,

CONSIDERANDO

Que la Secretaría Distrital de Ambiente, en uso de las funciones conferidas por el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio de las cuales le corresponde ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en el Distrito Capital de Bogotá, realizó visitas de control y seguimiento los días 6 de agosto y 18 de septiembre de 2015, al área del Parque Ecológico Distrital Humedal Capellanía, e l cual hace parte de la subcuenca del río Fucha, ubicado en la Localidad de Fontibón de esta ciudad, para verificar el cumplimiento normativo en materia de manejo y preservación ambiental del parque.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad de esta Secretaría, emitió el **Concepto Técnico No. 13212 del 22 de diciembre del 2015**, que sirvió de fundamento técnico para iniciar el procedimiento sancionatorio administrativo de carácter ambiental.

DEL AUTO DE INICIO

Que la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Dirección de Control Ambiental, en atención a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, encontró mérito suficiente para dar inicio al procedimiento sancionatorio ambiental mediante **Auto No. 00064 del 31 de enero de 2016**, en contra de la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de

presunta infracción ambiental. La precitada decisión fue notificada por aviso el día 10 de octubre de 2016, previo envío de citación a notificación personal a través del radicado No. 2016EE19437 del 1° de febrero de 2016 y radicado 2016EE19438 del 1° de febrero de 2016, al señor JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN y a la señora HORTENCIA PULIDO, respectivamente; publicada en el boletín legal de la Entidad el día 14 de diciembre de 2016 y comunicado a la Procuradora 22 Judicial II Ambiental y Agrario de Bogotá mediante Radicado No. 2016EE195597 del día 8 de noviembre de 2016.

DEL PLIEGO DE CARGOS

Que posteriormente mediante el **Auto No. 06423 del 11 de diciembre de 2018**, la Dirección de Control Ambiental formuló en contra de la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.7027, según las motivaciones expuestas en el siguiente cargo:

“(…)

*“**CARGO ÚNICO.** Por realizar actividades prohibidas en el área de manejo y preservación ambiental del Parque Ecológico Distrital Humedal capellanía que hace parte de la subcuenca del Rio Fucha ubicado en la Localidad de Fontibón de esta ciudad; infringiendo lo dispuesto en el Artículo 11 de la Decreto 062 de 14 de 2006 y Artículo 1 del Decreto 386 de 2008.”*

(…)”

Que el **Auto No. 06423 del 11 de diciembre de 2018**, fue notificado por edicto fijado el día 14 de noviembre de 2019 y desfijado el día 18 de noviembre de 2019, previo envío de citación a notificación personal mediante oficio con radicado No. 2018EE292981 del 11 de diciembre de 2018 a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890 y previo envío de citación a notificación personal mediante oficio con radicado No. 2018EE292982 del 11 de diciembre de 2018 al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.7027; y en el acto de notificación le fue informado el término que le otorga el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 para presentar los descargos.

DE LOS DESCARGOS

Que de acuerdo con lo enunciado en la parte considerativa del **Auto No. 06423 del 11 de diciembre de 2018**, la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890 y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.7027, contaban con diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del mismo, para que directamente o por medio de apoderado debidamente constituido, presentara por escrito los descargos a que hubiere lugar y aportara o solicitara la práctica de las pruebas que considerara pertinentes y que fueran conducentes de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

Así las cosas, esta Secretaría, procedió a revisar en el aplicativo de información de la Entidad - Forest - dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del **Auto No. 06423 del 11 de diciembre de 2018**, terminó previsto por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009; sin que se pudiese evidenciar radicado alguno que refiera a un escrito de descargos presentado por la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.7027; es por ello que esta Autoridad Ambiental determinó que no existen pruebas por decretar a petición de parte; en consecuencia, esta Secretaría dispuso abrir la etapa probatoria de acuerdo al proceso sancionatorio ambiental.

DE LAS PRUEBAS

Que mediante el **Auto No. 02760 de 31 de julio de 2020**, la Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenó la apertura de la etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta entidad a través del **Auto No. 00064 del 31 de enero de 2016**, en contra de la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.7027.

Que esta entidad dentro de la etapa probatoria, y a través del anterior auto, ordenó la incorporación del Concepto Técnico No. 13212 del 22 de diciembre de 2015, como medio probatorio por ser éste conducente, pertinente y necesario para demostrar la ocurrencia de los hechos constitutivos de infracción ambiental.

Que el anterior auto fue notificado por aviso el día 22 de febrero de 2021 al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.7027, mediante oficio con radicado 2021EE01433 del día 6 de enero de 2021 y a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890, mediante oficio con radicado 2021EE01435 del día 6 de enero de 2021; previo envío de citatorio mediante radicado No. 2020EE128203 del día 31 de julio 2020 al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.7027 y radicado 2020EE128200 del 31 de julio de 2020 a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890.

Que en desarrollo de la prueba incorporada por el Auto No. 02760 de 31 de julio de 2020, ha de resaltarse que:

1. El Concepto Técnico No. 13212 del 22 de diciembre de 2015, permitió a esta entidad determinar la sanción de acuerdo con el grado de afectación ambiental del parque.
2. Se evaluó jurídica y técnicamente todos los documentos que reposan en el expediente SDA-08-2016-108, emitiendo el Informe Técnico No. 02911, del 02 de agosto del 2021, en el cual se establecen los criterios para tomar una decisión de fondo respecto del proceso que nos ocupa.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE ESTA SECRETARÍA

Que una vez efectuada la revisión documental del expediente SDA-08-2016-108, se encontró la siguiente actuación técnica por parte de esta Secretaría:

1. Concepto Técnico No. 13212 del 22 de diciembre de 2015, que sirvió de argumento técnico para expedir el **Auto No. 00064 del 31 de enero de 2016** y que dada la información que reposa en el mismo, se considera jurídicamente pertinente recalcar en el presente acto administrativo, lo siguiente:

(...) **7. CONCLUSIONES**

1. *Realizando el cruce cartográfico de los polígonos de afectación por pastoreo de semovientes con la Zonificación Ambiental del PEDH Capellanía, se obtuvo que estos polígonos se encuentran directamente relacionados con la zona de restauración, la zona de recuperación ecológica y la zona de rehabilitación ecológica, según lo establecido en la Resolución 7474 del 30 de octubre de 2009, por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental.*

2. *Según el régimen de usos para la zona de restauración, la zona de recuperación ecológica y la zona de rehabilitación ecológica en el PMA del humedal, el pastoreo de semovientes es considerado como un uso prohibido (Tabla 2 del presente Concepto Técnico). Se identificaron tres polígonos de afectación en el sector sur en la zona de restauración.*

3. *El PEDH Capellanía se encuentra declarado en Estado de Prevención o Alerta Amarilla, donde el pastoreo de semovientes es considerado como una problemática en el ecosistema y que afecta significativamente las comunidades de flora y fauna del área protegida, según lo establecido en el Decreto 101 de 2015.*

4. *El área total de afectación objeto de análisis y evaluación en el PEDH Capellanía tiene una extensión 10,8 ha, con un porcentaje del 40% con relación al área total del humedal (27 ha).*

5. *En el registro de fecha 08/08/2015 se observó la mayor presencia de semovientes en cantidad de 9 individuos al interior del PEDH Capellanía.*

6. *El PEDH Capellanía presenta un régimen de disturbio complejo por el pastoreo de semovientes y adicionalmente se incluye la disposición de residuos sólidos, residuos de construcción y demolición y construcciones; cada uno en escala, frecuencia e intensidad, interactúan y afectan la estructura y funcionalidad del ecosistema.*

7. *En relación con la frecuencia, la probabilidad de encontrar semovientes en el humedal es del 96%, lo que hace que el disturbio por semovientes sea continuo en el tiempo.*

8. *En el sector Norte se obtuvieron 11 registros y un total de 28 avistamientos de semovientes. La frecuencia para el sector Norte es igual a 1,0, cuya probabilidad de encontrar semovientes en ese sector del PEDH Capellanía es del 100%.*

9. *En el sector Sur se obtuvieron 15 registros, para un total de 57 semovientes de tipo bovino. La frecuencia para el sector Norte es igual a 0,93, cuya probabilidad de encontrar semovientes en ese sector del PEDH*

Capellanía es del 93%, debido a que en la fecha del 18 de septiembre de 2015 no se registraron semovientes en ese sector.

10. Se pudo constatar con ayuda del registro fotográfico que algunos de los semovientes avistados fueron registrados en varias ocasiones.

11. La actividad de pastoreo de semovientes en el PEDH Capellanía es considerada como un uso prohibido de acuerdo con lo establecido en el régimen de usos del Decreto 190 de 2004 – Plan de Ordenamiento Territorial (Artículo 93) y el régimen de usos del Plan de Manejo Ambiental del Humedal.

12. El ensamblaje local de aves registrado en el PEDH Capellanía tiene una estructura (en términos de composición de especies y abundancia) típica de los humedales del altiplano cundiboyacense. En especial de los humedales que se encuentran dentro del perímetro urbano del distrito capital. Una menor riqueza de especies comparado con los otros humedales se puede explicar en torno al contexto del paisaje dentro del cual se encuentra inmerso el humedal, dado que hay una baja proporción de coberturas de vegetación acuática y arbórea y existe un alto grado de aislamiento espacial en relación a otros humedales de la capital”.

(...)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que en nuestra legislación existe un importante mecanismo de protección del medio ambiente, en cuanto otorga a los entes públicos responsables del control ambiental, la facultad de tomar medidas e imponer las sanciones que consideren pertinentes, y así cumplir con el precepto constitucional y legal de hacer prevalecer el interés general sobre el particular que debe regir dentro de nuestro Estado social de derecho. De la misma forma, existen en nuestro ordenamiento unas normas reguladoras ambientales que conducen a la aplicación de medidas preventivas y sancionatorias, por el incumplimiento a las regulaciones establecidas sobre la protección del ambiente y el manejo de los recursos naturales renovables en nuestro país.

Que de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que la Constitución Nacional contiene derechos y deberes de los ciudadanos frente a la sostenibilidad de un ambiente sano, en el artículo 79 encontramos que “*Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano*” y en el artículo 80 ordena al Estado que “...deberá prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir reparación de los daños causados”. Es por esto que las autoridades ambientales están en la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano a los ciudadanos, y hacer cumplir las disposiciones con el fin de que esto no sea vulnerado.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política, preceptúa que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, en el inciso 2° del mencionado artículo, se

refiere a los instrumentos represivos y establece la obligación por parte del Estado para “imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Que igualmente, el ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral octavo el de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Consecuentes con la política pública de protección del ambiente y el contenido y alcance de las regulaciones existentes en materia de protección ambiental y manejo de los recursos naturales en nuestro país, es imprescindible actuar dentro del marco de las finalidades de la función administrativa de la autoridad ambiental, a efectos de propender por el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, para velar porque se asegure el establecimiento y la operación de controles adecuados y eficaces respecto a los factores de deterioro ambiental, teniendo de presente que el desarrollo económico no se convierta en una amenaza a la preservación de los recursos naturales renovables.

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Que el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala: *“En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales”*.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.

Que, a su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio ambiente.

Que el artículo 9° de la Ley 1333 de 2009, estableció taxativamente las causales de cesación de procedimiento, las cuales se describen a continuación:

“ARTÍCULO 9°. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL.
Son causales de cesación del procedimiento las siguientes:

- 1o. Muerte del investigado cuando es una persona natural.*
- 2o. Inexistencia del hecho investigado.*
- 3o. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.*
- 4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada.*

PARÁGRAFO. Las causales consagradas en los numerales 1o y 4o operan sin perjuicio de continuar el procedimiento frente a los otros investigados si los hubiere.”

Que el artículo 23 *Ibíd*em, estableció la cesación de procedimiento, en los casos en los cuales apareciera demostrado plenamente alguna de las causales señaladas en el artículo 9º de la misma ley, para lo cual se deberá expedir el acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor.

La cesación de procedimiento solo se podrá declarar antes del auto de formulación de pliego de cargos, excepto en los casos de fallecimiento del infractor. Para el caso en comento, esta autoridad ambiental no encuentra ninguna causal legal para que opere la cesación del procedimiento; así mismo, no se evidencia que la investigada, haya presentado solicitud expresa de cesación de procedimiento por alguna de las causales indicadas en el artículo 9º de la Ley 1333 de 2009.

Que frente a las conductas objeto de infracción, es pertinente precisar que las mismas son de ejecución instantánea, y por tanto, así haya sido desmontada y adecuada la publicidad exterior visual por parte de su propietario y/o anunciante, ello no exime de responsabilidad a la sociedad investigada. Que es necesario resaltar lo establecido en el artículo 9 del Decreto 959 de 2000 “Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá”, el cual indica lo siguiente:

“ARTÍCULO 9. Responsables. Son responsables por el incumplimiento de lo que aquí se reglamenta la persona natural o jurídica que elabore el aviso, el anunciante y el propietario del establecimiento o predio que coloque el aviso sin el cumplimiento de los requisitos previstos quienes se harán acreedores a las sanciones establecidas en este acuerdo”. (Resaltado fuera de texto).

Que la Corte Constitucional, en Sentencia C- 595 de 2010, al analizar la exequibilidad del parágrafo del artículo 1º y el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1333 de 2009, estableció:

“Los parágrafos demandados no establecen una “presunción de responsabilidad” sino de “culpa” o “dolo” del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333).

Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales.

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración.”

Tal y como lo señala la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias, la actividad comercial de las empresas debe enmarcarse en los rangos que determine la ley, al punto que se proteja la salud y el medio ambiente. Veamos:

“Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. (Subrayado fuera del texto).

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental.

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente.

La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.

No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que su primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar.” (Sentencia C-254 de 1.993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).”

Que, respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero "...dentro de los límites del bien común...".

Que adicionalmente la Corte Constitucional en Sentencia, T- 536 del 23 de septiembre de 1992, determinó:

"...Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia..."

Se considera pertinente en este momento, hacer referencia a algunos criterios adicionales de la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia T- 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:

"La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.

"Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros)."

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero señala:

"El medio ambiente desde el punto de constitucional, involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo."

De acuerdo a esta interpretación que hace la Corte Constitucional, todas las personas son responsables del cuidado y conservación de los recursos naturales, tomando conciencia que no se debe agotar o menoscabar la base en que se sustentan, evitando el deterioro del medio

ambiente, teniendo en cuenta que no solo es un derecho disfrutar del ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional, sino que también es un deber de todos protegerlo y propender por la calidad de vida y bienestar social de las futuras generaciones para la satisfacción de sus propias necesidades, principio por el cual se da cumplimiento al concepto de desarrollo sostenible, consagrado en la Ley 99 de 1993. Así mismo hace parte de este precepto, el cumplimiento de las obligaciones y deberes con relación a las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

DEL CASO CONCRETO

Que descendiendo al caso sub examine, se analizará la responsabilidad existente de la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, respecto del cargo formulado en el Auto No. 06423 del 11 de diciembre de 2018.

CARGO ÚNICO:

“(…)

“**CARGO ÚNICO.** Por realizar actividades prohibidas en el área de manejo y preservación ambiental del Parque Ecológico Distrital Humedal capellanía que hace parte de la subcuenca del Río Fucha ubicado en la Localidad de Fontibón de esta ciudad; infringiendo lo dispuesto en el Artículo 11 de la Decreto 062 de 14 de 2006 y Artículo 1 del Decreto 386 de 2008.”

(…)”

“(…)”

…

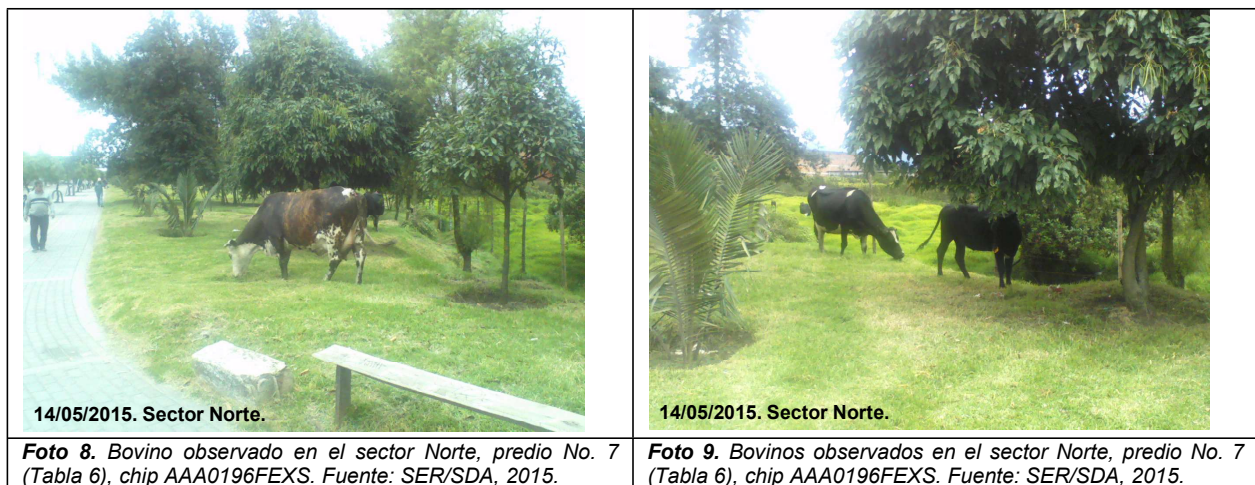




Imagen 10. Semovientes observados en el sector Norte, predio No. 7 (Tabla 6), chip AAA0196FEXS. Fuente: SER/SDA, 2015.



Foto 10. Bovino y Equino al interior del cuerpo de agua del humedal, sector Norte, chip AAA0078JWSK, predio 1 (Tabla 6). Fuente: SER/SDA, 2015.



Foto 11. Ovino observado en el sector Norte, predio No. 1 (Tabla 6), chip AAA0078JWSK. Fuente: SER/SDA, 2015.



Foto 12. Bovinos observados en el sector Norte, predio No. 9 (Tabla 6), chip AAA0232CSWW. Fuente: SER/SDA, 2015.



Foto 13. Bovino observado en el sector Norte, predio No. 9 (Tabla 6), chip AAA0232CSWW. Fuente: SER/SDA, 2015.



Imagen 11. Observación de semoviente en diferentes fechas en los días 18/04/2015 y 18/07/2015.
Fuente: SER/SDA 2015.







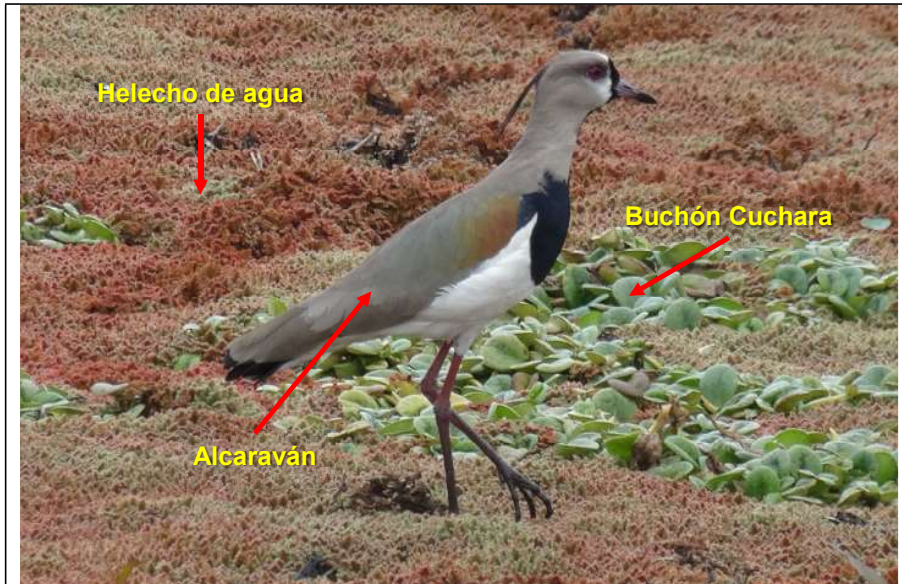


Imagen 15. Individuo de Alcaraván (*Vanellus chilensis*), en un parche de vegetación acuática de Helecho de agua (*Azolla filiculoides*) y Buchón cuchara (*Limnobium laevigatum*), registrado en visitas técnicas del 03/06/2015 y 18/09/2015. Fuente: SER/SDA, 2015.



Foto 19. Evidencias de huecos el suelo en el PEDH Capellanía, sector Sur, por pisoteo de semovientes. Fecha 11/10/2013, Radicado 2015EE169578.



Foto 20. Zona de restauración en el PEDH Capellanía, donde se ha identificado fuertemente la actividad de pastoreo de semovientes. Fuente: SER/SDA 2015.

(...)"

Que conforme al registro fotográfico del Concepto Técnico No. 13212 del 22 de septiembre de 2015 y del acta de visita técnica, se pudo establecer que la afectación por pastoreo de semovientes en el humedal ha transformado físicamente el ecosistema y ha infringido la norma establecida para el manejo y conservación de esta área protegida; las anteriores conductas fueron realizadas por la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, en el Parque Ecológico Distrital Humedal Capellanía, ubicado en la Localidad de Fontibón de esta ciudad, contraviniendo la norma que se cita a continuación:

Decreto 062 de 2006

Artículo 11°.- Del régimen de usos. Sin Perjuicio de lo establecido en la normatividad superior, los humedales del Distrito Capital deben tener como usos principales la conservación de la biodiversidad, la investigación científica regulada, la educación ambiental y como usos condicionados la recreación pasiva contemplativa. No se permitirá dentro de los cuerpos de agua, ni en sus zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental, ni en áreas circundantes, actividades agrícolas, pecuarias, urbanísticas o de recreación activa de ningún tipo y demás usos no consecuentes con su naturaleza.

Dadas las características especiales de los humedales ubicados dentro del perímetro urbano y de sus zonas de ronda, serán usos principales de los mismos las actividades que promuevan su uso sostenible, conservación, rehabilitación o restauración. Sin embargo, a partir de la caracterización y zonificación, se establecerán en el plan de manejo respectivo, los usos compatibles, restricciones y usos prohibidos para su conservación y uso sostenible.

Decreto 386 de 2008

Artículo 1°. - *Prohibir la construcción, urbanización, rellenos, disposición de tierra o escombros y cualquier otra conducta que atente contra los humedales, sus zonas de ronda hidráulica y de manejo y preservación ambiental, del Distrito Capital.*”

Así pues, al tratarse de una conducta de tracto sucesivo, la infracción a la norma se causó desde las primeras visitas técnicas efectuadas los días 6 de agosto y 18 de septiembre de 2015 y se ha mantenido en el tiempo, toda vez que, no hay prueba que demuestre que se han tomado acciones con posterioridad por parte de los infractores que los exima de la responsabilidad, si no que por el contrario estas han permanecido en el tiempo.

Con la infracción mencionada en el cargo, se genera un riesgo potencial de afectación por cuanto se trata de la conservación de la biodiversidad y de los humedales ubicados dentro del perímetro urbano y de sus zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental, dado que “*Los humedales son considerados como ecosistemas estratégicos (Artículo 29, Decreto 2372 de 2010), los cuales, según RAMSAR, “son indispensables por los innumerables beneficios o servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático”, así como la fauna y flora asociados en dicho ecosistema*”. El pastoreo de semovientes afecta significativamente los ecosistemas, y principalmente la dinámica de la vegetación y la población de plantas. El concepto técnico No 13212 del 22 de diciembre del 2015, describe la afectación que se generó en el PEDH Capellanía: “*Para el caso específico del pastoreo de semovientes en el PEDH Capellanía, el disturbio por pastoreo de semovientes ha generado cambios significativos en la vegetación (defoliación, extracción de biomasa, pisoteo, rozas y estercolado). La intensidad y las características de tales cambios varían según la carga animal, los patrones de pastoreo y la capacidad de recuperación de la vegetación. Si la carga animal no es la adecuada, se produce la disminución de la productividad y, con el tiempo, cambios en la composición y estructura de la vegetación (Huntly, 1991; Montalvo et al., 1993; Milchumas et al 1998; García-González, 2008 en: Lansanta, 2010)*”

Por tal motivo, en el presente acto se declarará la responsabilidad ambiental por la infracción aquí señalada a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, y se les impondrá la sanción administrativa señalada en la Ley 1333 de 2009 y las disposiciones normativas que la desarrollan.

DE LA SANCIÓN A IMPONER

Que en consideración a los preceptos constitucionales y legales esta Secretaría ha dado cabal cumplimiento al debido proceso dentro del proceso sancionatorio iniciado y las decisiones tomadas tienen su fundamento legal, habiéndose cumplido los procedimientos legales instaurados en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009 y en las demás normas aplicables al caso, preservando las garantías que protegen, en este caso, a los investigados, la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, ubicados en la Carrera 96 bis N° 24 – 98 y en la Avenida 22 N° 96-82 de la localidad de Fontibón de esta

ciudad, respectivamente; quienes no desvirtuaron el cargo formulado, por lo cual la Secretaría Distrital de Ambiente, está en la obligación de imponer la sanción respectiva.

Que la normatividad ambiental es de obligatorio cumplimiento y la violación de esta acarreará la imposición de las sanciones legales vigentes. Así mismo, los actos administrativos que expide la autoridad ambiental en desarrollo de esa normativa deben ser observados en su integridad por parte del administrado y su desacato conlleva a la imposición de las respectivas sanciones legales.

Que esta entidad es competente para imponer las sanciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 según la gravedad de las infracciones debidamente comprobadas.

Que la precitada disposición, señala el tipo de sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables. Igualmente, precisa en su párrafo primero, que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de las obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados, ni del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

***“ARTICULO 40.- Sanciones.** Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, (...) impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:*

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (...)

Que el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 determinó que el Gobierno Nacional definiría mediante reglamento los criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes donde se tendría en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor.

Que con fundamento en lo dispuesto anteriormente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 3678 de 4 de octubre de 2010, compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”* y en su artículo 2.2.10.1.1.1., dispuso:

***“ARTÍCULO 2.2.10.1.1.1. Objeto y ámbito de aplicación.** El presente decreto tiene por objeto señalar los criterios generales que deberán tener en cuenta las autoridades ambientales para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.”*

Respecto al proceso de individualización de la sanción el Decreto 1076 de 2015 indica en su artículo 2.2.10.1.1.3., que:

“Artículo 2.2.10.1.1.3. Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento.

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción.

Una vez agotado el trámite procesal dispuesto en la Ley 1333 de 2009 y advertida la procedencia de sanción respecto a las infracciones ambientales cometidas por la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, ubicados en la Carrera 96 bis N° 24 – 98 y en la Avenida 22 N° 96-82 de la localidad de Fontibón de esta ciudad, respectivamente; esta Dirección emitió el **Informe Técnico No. 02911 del 02 de agosto del 2021**, que desarrolla los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA, de conformidad con el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, el cual dispone:

“Artículo 2.2.10.1.2.1.- Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y con base en los siguientes criterios:

B: Beneficio ilícito

α : Factor de temporalidad

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (...)

En cumplimiento de la prenotada normativa, a través del Informe Técnico No. 02911 del 02 de agosto del 2021, se desarrollaron cualitativa y cuantitativamente los citados criterios, de conformidad con la metodología para la tasación de multas prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 el cual prevé:

“Artículo 4.- Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * i) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

A continuación, se dará aplicación a la modelación matemática prevista en el artículo 4° de la Resolución MAVDT 2086 de 2010, de cara a los criterios para la imposición de la sanción principal de MULTA desarrollados para el presente caso respecto de la infracción ambiental causada por la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor

JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, en el Informe Técnico No. 02911 del 02 de agosto del 2021, así:

“(…)

5. CALCULO DE LA MULTA

Dando cumplimiento al artículo 4 de la Resolución MAVDT 2086 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y habiendo adelantado la metodología para la tasación de multa, se da evaluación a la siguiente modelación matemática:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha * r) * (1 + A) + Ca] * C$$

Tabla 8. Resumen de las variables para el cálculo de la multa

Beneficio ilícito (B)	\$0
Temporalidad (α)	2.7225
Grado de afectación ambiental y/o riesgo (i/r)	\$67.775.169
Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)	0
Costos Asociados (Ca)	0
Capacidad Socioeconómica (Cs)	0,25

$$\text{Multa} = B + [(2.3846 \times 1.022.146.261) \times (1 + 0.3) + 0] \times 0.01$$

$$\text{Multa} = 31.686.330$$

“(…)”

Que, atendiendo el desarrollo del modelo matemático antecedido, al igual que las conclusiones del Informe Técnico No. 02911 del 02 de agosto del 2021, una vez aplicados los criterios establecidos en la Resolución 2086 del 2010 para el cálculo de la multa del proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y el señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, esta Dirección encuentra procedente imponer como sanción principal una multa por valor de TREINTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 31.686.330) a la señora **HORTENCIA PULIDO**, identificada con cédula de ciudadanía 51.564.890; y una multa por valor de TREINTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 31.686.330) al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702; como consecuencia de encontrarlos responsables ambientalmente.

Que la sanción a imponer mediante la presente resolución no exonera a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, los actos administrativos expedidos por las autoridades ambientales que impongan sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva.

De otra parte, el inciso 3° del artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, determina que las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales, deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales; razón por la cual en la parte resolutive del presente acto administrativo se oficiará al Procurador Judicial de Asuntos Ambientales y Agrarios, informándole la terminación del presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra de la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702.

COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Que el artículo 5° del Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, en su literal d) asigna a esta Secretaría la función de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° numeral 1 de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021, proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente, se delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

“1. Expedir los actos administrativos de trámite y definitivos relacionados con los procesos sancionatorios de competencia de la Secretaria Distrital de Ambiente.”

Que, en mérito de lo expuesto, esta Entidad,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar responsable a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890; y al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, del cargo formulado mediante el **Auto No. 06423 del 11 de diciembre de 2018** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Imponer a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 51.564.890, la SANCIÓN de MULTA por valor de TREINTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 31.686.330) y al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cedula de ciudadanía No.79.235.702, la SANCIÓN de MULTA por valor de TREINTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 31.686.330).

PARÁGRAFO PRIMERO. - La multa anteriormente fijada, se deberá pagar en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, en cualquier sucursal del Banco de Occidente, a órdenes de la Secretaría Distrital de Ambiente, previa solicitud de un recibo con código de barras disponible en la sede de la entidad, ubicada en la carrera 14 No. 54 -38. Una vez efectuado el pago se deberá allegar a esta Secretaría, copia del recibo expedido con destino al expediente **SDA-08-2016-108**.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Si el citado obligado al pago de la multa, no diera cumplimiento a lo ordenado, dicha multa presta merito ejecutivo y, por tanto, se hará efectiva por medio del procedimiento de jurisdicción coactiva, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO. - El incumplimiento de los términos y cuantías establecidos dará lugar a su respectiva exigibilidad por la jurisdicción coactiva, de la cual se encuentran investidas las entidades públicas del denominado orden nacional en virtud del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y en concordancia con el artículo 42 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora **HORTENCIA PULIDO** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.564.890, en la Carrera 96 Bis No. 24- 98 Puerta Tejada, localidad de Fontibón de esta ciudad; y al señor **JORGE ENRIQUE LÓPEZ BELTRÁN** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.235.702, en la Avenida Carrera 22 No. 96-82, Puerta Tejada, localidad de Fontibón de esta ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente resolución a la Subdirección Financiera de la Dirección de Gestión Corporativa de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar al Procurador Delegado para Asuntos Judiciales Ambientales y Agrarios el presente acto administrativo, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, de conformidad con lo señalado en el memorando 005 del 14 de marzo de 2013 emitido por el mismo ente de control enunciado y su instructivo.

ARTÍCULO SEPTIMO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

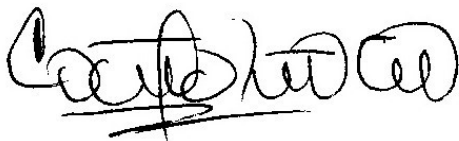
ARTÍCULO OCTAVO. - Reportar la presente sanción una vez se encuentre ejecutoriada, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargado del RUIA, de conformidad con lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO. - Ordenar el archivo definitivo de las diligencias administrativas que reposan en el expediente **SDA-08-2016-108**, una vez se cumplan las órdenes impartidas en los artículos anteriores y la firmeza del presente acto administrativo.

ARTÍCULO DECIMO. - Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer personalmente o mediante apoderado debidamente constituido, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos legales contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, de conformidad con lo expuesto en el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de septiembre del año 2021



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Elaboró:

FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ	CPS:	CONTRATO 2021-1062 DE 2021	FECHA EJECUCION:	07/09/2021
--------------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

FRANKI ALEXANDER GOMEZ SANCHEZ	CPS:	CONTRATO 2021-1062 DE 2021	FECHA EJECUCION:	17/09/2021
--------------------------------	------	-------------------------------	------------------	------------

Revisó:

JAIRO MAURICIO BELTRAN BALLEEN	CPS:	CONTRATO 2021462 DE 2021	FECHA EJECUCION:	20/09/2021
--------------------------------	------	-----------------------------	------------------	------------

Aprobó:

Firmó:

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	28/09/2021
---------------------------------	------	-------------	------------------	------------